

Talca, once de febrero de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En causa Rol ingreso Corte N° 673-2023, que incide en causa RIT O-609-2022 RUC N° 22- 4-0444906-4, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, don Fernando Salvo Alcántar, en representación de los demandantes, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 23 de noviembre de 2023 por el Magistrado del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, don Jaime Cruces Neira, que resolvió lo siguiente:

“I.- Que SE ACOGE PARCIALMENTE la demanda deducida por los demandantes doña Karla Andrea Hernández Núñez, doña Pamela Andrea Moraga Verdugo, doña Bárbara Andrea Meza Valdés, doña Bárbara Constanza Muñoz Espina, doña Francisca María De Los Ángeles Valenzuela Morales, doña Liliana Angélica Monje Márquez, doña Pía Constanza Gutiérrez Fuentes, doña Catalina Estefanía Villar Grandón, doña Miryam Fernanda Gómez Henríquez, doña Daniela Andrea Canales Oyarzún, don Jacob Ignacio Sáez Salazar, don Javier Ignacio Alarcón Moyano, y doña Gabriela Lourdes Rojas Guzmán, en contra de Subsecretaria de salud Pública, Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, Fisco de Chile, todos ya individualizados, solo en cuanto la demandada deberá pagarles a los siguientes demandantes, las siguientes sumas por concepto de feriado proporcional y se rechaza la demanda en todo lo demás pedido:

- 1.- doña Karla Andrea Hernández Núñez, \$305.764.
- 2.- doña Pamela Andrea Moraga Verdugo, \$562.500.
- 3.- doña Bárbara Andrea Meza Valdés, \$247.372.
- 4.- doña Bárbara Constanza Muñoz Espina, \$405.499.
- 5.-doña Francisca María De Los Ángeles Valenzuela Morales, \$314.158.
- 6.- doña Liliana Angélica Monje Márquez, \$111.224.
- 7.- doña Pía Constanza Gutiérrez Fuentes, \$ 205.422.
- 8.- doña Catalina Estefanía Villar Grandón, \$216.670.
- 9.- doña Miryam Fernanda Gómez Henríquez, \$777.500.
- 10.- doña Daniela Andrea Canales Oyarzún, \$188.612.
- 11.- don Jacob Ignacio Sáez Salazar, \$276.113.
- 12.- don Javier Ignacio Alarcón Moyano, \$375.000.
- 13.- doña Gabriela Lourdes Rojas Guzmán, \$370.833.

II.- Que SE RECHAZA en todas sus partes la demanda deducida por doña Camila Andrea Pérez Warnken, don Franco Alexis Castro Castro y don Camilo Alejandro Muñoz Espina, en contra de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UDYXXSXPXLS

Subsecretaria de salud Pública, Secretaria Regional Ministerial de Salud del Maule, Fisco de Chile.

III.- Que las sumas de dinero indicadas en el acápite I, deberán ser pagadas debidamente reajustadas y con los intereses a que se refiere el artículo 63 del Código del Trabajo.”

El recurrente fundamenta su impugnación en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo y, subsidiariamente, en el motivo del artículo 478 letra e) del mismo cuerpo legal.

Admitido y concedido el recurso por el respectivo Tribunal y, declarado admisible por esta Corte, se fijó audiencia para su vista, la que se llevó a efecto el día 3 de febrero de 2025.

### **OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que el recurrente fundamenta su impugnación en la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica; y en subsidio, en la causal del artículo 478 letra e) del mismo cuerpo legal, por haberse dictado la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el Código del Trabajo.

Respecto a la causal principal, el recurrente argumenta que el tribunal infringió el principio de **razón suficiente** al tener por acreditados los hechos contenidos en la carta de despido por considerarlos públicos y notorios, sin realizar un análisis pormenorizado de la prueba rendida, especialmente los informes epidemiológicos que demostrarían que, a la época de los despidos, no existía una disminución significativa de casos COVID-19 en la Región del Maule que justificara la necesidad empresarial invocada.

En cuanto a la causal subsidiaria, sostiene que la sentencia omitió el análisis de toda la prueba rendida, limitándose a considerar sólo dos antecedentes: los hechos estimados públicos y notorios, y un informe emanado de un funcionario de la propia Seremi, desatendiendo el resto del material probatorio, particularmente los informes epidemiológicos acompañados que desacreditarían la justificación del despido.

Sostiene el recurso, que los informes epidemiológicos presentados como prueba demuestran una progresión de casos en la Región del Maule y que fueron acompañados e incorporados al proceso desde los folios 57 al 133, abarcando períodos semanales desde noviembre de 2021 hasta enero de 2023, incluyendo gráficos sobre número de camas críticas



disponibles, nivel de ocupación, fallecidos por COVID-19 según estadística DEIS hasta febrero 2023, evolución de casos confirmados por región, y curva de casos activos y recuperados.

Alega que estos antecedentes probatorios demuestran que, contrario a lo afirmado en la carta de despido, no existía una disminución considerable de casos dicha enfermedad en la región, que justificara la restructuración invocada como causal de despido, evidencia que habría sido omitida por el tribunal al fundamentar su decisión únicamente en la calificación de hechos públicos y notorios y en un informe emanado de la propia demandada.

El recurrente solicita que se acoja el recurso, se invalide la sentencia impugnada y se dicte sentencia de reemplazo que acoja íntegramente la demanda por despido injustificado, con costas del juicio y del recurso. Fundamenta la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, señalando que de haberse declarado injustificado el despido, habría correspondido el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio y el lucro cesante hasta el término de la alerta sanitaria el 31 de agosto de 2023, prestaciones que fueron rechazadas por estimarse justificado el despido.

**SEGUNDO:** Que la primera causal de nulidad invocada es la contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

El recurrente hace consistir este motivo en la infracción por parte de la sentencia al principio de **razón suficiente** al tener por acreditados los hechos contenidos en la carta de despido por considerarlos públicos y notorios, sin realizar un análisis pormenorizado de la prueba rendida, especialmente los informes epidemiológicos que demostrarían que, a la época de los despidos, no existía una disminución significativa de casos COVID-19 en la Región del Maule que justificara la necesidad empresarial invocada.

**TERCERO:** Que esta Corte, de la atenta lectura del fallo, constata que el sentenciador realizó una valoración exhaustiva y fundamentada de los medios probatorios que le permitieron tener por acreditados los hechos contenidos en la carta de despido.

En efecto, el tribunal del grado dio por establecidos los hechos invocados mediante una triple vertiente probatoria: primero, a través de hechos públicos y notorios relativos a la disminución de casos COVID-19 y su gravedad durante el año 2022, los que "no requieren de prueba



adicional" al no existir evidencia en contrario que los desvirtúe; segundo, mediante prueba documental emanada de la autoridad sanitaria, consistente en: a) la "Minuta técnica denominada Estrategia Testeo, Trazabilidad y Aislamiento enfermedad por SARS-CoV-2, Región del Maule" de 23 de septiembre de 2022, a la que el sentenciador otorgó "valor suficiente de prueba pues fue elaborada por un funcionario público, en cumplimiento de sus funciones y en una materia relevante"; b) la Resolución Exenta N° 1948 de 26 de septiembre de 2022, que formalizó "la restructuración, reducción y cierre de estrategias conformadas con ocasión del Decreto N° 4 / 2020 del Ministerio de Salud"; y c) el Ordinario N° 4620 de 28 de septiembre de 2022 del Subsecretario de Salud, que estableció las "nuevas orientaciones para la adaptación de la estrategia de control de la pandemia"; y tercero, a través de la prueba instrumental consistente en contratos de trabajo y anexos que acreditaron que las funciones de los demandantes estaban directamente vinculadas a las estrategias modificadas o eliminadas. La valoración conjunta y razonada de estos medios probatorios permitió al sentenciador concluir, conforme a las reglas de la sana crítica, que existió una base objetiva y documentada para el término de los contratos por la causal invocada, al haberse acreditado fehacientemente la restructuración de las estrategias sanitarias que fundamentaron la contratación de los demandantes bajo el artículo 10 del Código Sanitario, conclusión que aparece suficientemente fundada en el proceso racional de valoración probatoria desarrollado en la sentencia.

**CUARTO:** Que respecto a la infracción al principio de razón suficiente alegada por el recurrente, cabe señalar que éste se limita a manifestar su disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el tribunal de base, sin explicitar de manera concreta y específica cómo la sentencia impugnada habría transgredido dicho principio lógico en el análisis de la prueba rendida.

En efecto, el libelo recursivo se construye sobre la base de una crítica a la ponderación de la carta de despido como medio probatorio, pero omite desarrollar un análisis pormenorizado del razonamiento contenido en el fallo, el cual, como se advierte de su lectura, no se agota en dicho instrumento sino que comprende una valoración integral de diversos medios de prueba, incluyendo documentación oficial emanada de la autoridad sanitaria y antecedentes contractuales, según quedó asentado en el motivo precedente.

**QUINTO:** Que en cuanto a la segunda causal de nulidad invocada, fundada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por haberse dictado la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 459 N° 4 del mismo cuerpo legal, esto es, el análisis de toda la



prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación, debe tenerse presente lo que sigue.

Que, como se desprende del considerando **tercero** del presente fallo, la sentencia impugnada contiene un análisis pormenorizado y exhaustivo de los diversos medios de prueba aportados al proceso, efectuando una triple valoración probatoria que comprende: los hechos públicos y notorios relativos a la disminución de casos COVID-19; la prueba documental emanada de la autoridad sanitaria, consistente en la Minuta Técnica, la Resolución Exenta N° 1948 y el Ordinario N° 4620; y la prueba instrumental referida a los contratos de trabajo y anexos.

Este análisis integral permitió al sentenciador establecer los hechos que estimó probados y exponer el razonamiento que lo condujo a su decisión, cumpliendo cabalmente con las exigencias establecidas en el artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, sin que se advierta la omisión alegada por el recurrente.

**SEXTO:** Que por las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose desestimado tanto la causal principal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, como la causal subsidiaria del artículo 478 letra e) del mismo cuerpo legal, corresponde rechazar íntegramente el recurso de nulidad interpuesto, pero sin mediar condena en costas, por estimar que tuvo motivo plausible para recurrir.

Por estas consideraciones, más lo previsto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad en todas sus partes, interpuesto por el abogado don FERNANDO SALVO ALCÁNTAR, en representación de los demandantes, en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de noviembre de 2023 dictada por don Jaime Cruces Neira, juez titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, la que, en consecuencia, **NO ES NULA**.

Redacción del abogado integrante Rodrigo Eduardo de la Vega Parra.

**Regístrese y devuélvase.**

Rol Corte N° 673-2023 laboral.

Se deja constancia que no firma, pese a haber concurrido a la vista y al acuerdo de esta causa, el ministro don Moisés Muñoz Concha por encontrarse con feriado legal y el abogado integrante don Rodrigo de la Vega Parra, por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UDYXXSXPXLS



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UDYXXSXPXLS

Proveído por la Presidenta de la Primera Sala de la C.A. de Talca.

En Talca, a once de febrero de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: UDYXXSXPXS